

*Guzman.—Luis Velasquez.—M. Zavala.*  
*—Enrique Landa, secretario.*

Es copia que certifico. México, Octubre  
 ... de 1874.—*Lic. Emilio Pardo, oficial*  
*mayor interino.*

## AMPARO

*Interpuesto ante el Juzgado de Distrito de Yucatan por D. Ramon Solís, contra los procedimientos del C. Juan N. Buendía, que funciona como Juez del crimen en la capital del Estado, por violacion de garantías.*

### PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

#### C. Juez de Distrito:

El informe emitido sobre lo principal de este juicio, acredita que el acto reclamado por D. Ramon Solís, procede del Juez de 1ª instancia accidental del Partido de Izamal, que es quien le instruye el proceso que ocasiona su prision, y no el Lic. D. Juan N. Buendía, como equivocadamente sin duda aseguró el actor al ratificar el escrito de queja presentado por su esposa Dª Teodocia López.

Si el Sr. Buendía fuese la persona que estuviese juzgando al quejoso, el Fiscal no vacilaría un solo instante en pedir que se accediese al amparo demandado de V., por que careciendo aquel de toda autoridad en virtud de no tener un origen constitucional y ni siquiera legítimo, como es público y notorio, carece tambien de absoluta competencia para juzgar á nadie, puesto que primero es ser Juez, que ser competente en este ó en el otro negocio; pero el que instruye la causa de D. Ramon Solís, es el de 1ª instancia de Izamal que ejerce accidentalmente estas funciones, como Juez de paz llamado por la ley, en defecto de aquella autoridad propietaria; y si la incompetencia del Sr. Buendía es evidente por las razones que ha indicado el Fiscal, no existe la mis-

ma evidencia respecto de la falta de jurisdicción del Juez de paz de Izamal que juzga á Solís, por que no consta que proceda de la eleccion simulada de esa clase de funcionarios, dispuesta por la minoría arbitraria de la actual Legislatura de este Estado, de que derivan su falso título los jueces de 1ª instancia, ni de la declaracion que esa misma minoría hubiese hecho en un decreto esencialmente apócrifo, con el objeto de revestirlos de una autoridad que solo podia ser legítima y constitucional, emanando del libre sufragio del pueblo yucateco, por las vias y formas que señala su constitucion particular. El actor pues, ha debido probar una de dos cosas: ó que quien lo está juzgando es el Lic. D. Juan N. Buendía, para reconocer desde luego la procedencia del amparo por la pública notoriedad de su incompetencia, ó que el Juez de paz de Izamal, que por ministerio de la ley del Estado funciona como de 1ª instancia de aquella ciudad, y que es el que realmente lo juzga, padece tambien de los vicios radicales apuntados, que anulan por completo su aparente jurisdicción.

Probado que hubiese sido cualquiera de estos dos extremos, el Fiscal necesariamente pediría el otorgamiento del recurso intentado, porque con el hecho que lo motiva, se violaría el art. 16 de la Constitucion de la República; pero aun en este caso, el amparo no produciría el efecto que sin duda se propone el quejoso, de volver al pleno goce de su libertad, pues existiendo en todo su vigor el auto formal de su prision, que no niega se haya proveido en tiempo oportuno ó por autoridad competente, todo lo que podría suceder, sería que dejase de juzgarlo quien lo juzga hoy sin competencia alguna, quedando paralizada su causa mientras hubiese Juez legítimo que la siguiera, pues ni era posible hacer que se le dejase libre, sin desvirtuar el auto expresado de su encarcelacion, por el gravísimo delito que se determina en el adjunto informe, corroborado por la fama pública, ni debería expo-

nerse á la sociedad, á las consecuencias funestas de semejante soltura, que serviría de patente de indemnidad á los malhechores, sin violar abiertamente las garantías que esa misma sociedad tiene tambien, y que están muy encima de las que goza el individuo, puesto que el bien procomunal siempre debe preferirse y anteponerse á la conveniencia particular.

Por estas razones, y en virtud de que el quejoso D. Ramon Solís no ha probado en el presente juicio de amparo que se viola en su persona el artículo 16 de la Constitución de la República que le sirvió de fundamento, el Fiscal, apoyado en ese mismo precepto constitucional, y en art. 1º fracción 1ª de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, concluye pidiendo á V. declarar:

1º: Que la Justicia de la Union no ampara ni protege á D. Ramon Solís, contra los actos del Juez de 1ª instancia accidental de Izamal, que lo juzga como presunto reo de homicidio calificado. Y 2º: Que mande V. publicar su fallo por el órgano de la prensa, y que se eleven originales estos autos á la Suprema Corte de Justicia, para su legal revision.

Mérida, Abril 25 de 1874.—*P. Híjuelos.*

#### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Juzgado de Distrito del Estado de Yucatan. Mérida, Mayo 1º de 1874.—Visto este juicio de amparo promovido por D. Ramon Solís, contra el C. Juez de 1ª instancia de Izamal, que lo está juzgando y lo tiene preso por presunciones de homicidio calificado, con infraccion del art. 16 de la Constitución federal. Visto lo informado por la autoridad responsable acerca del acto reclamado; el auto en que se negó la suspension de este acto; el informe de la misma sobre lo principal; el dictámen fiscal y la citacion para sentencia, con cuanto mas ver y tener presente convino.

Considerando: que quien está juzgando

al quejoso es el Juez de 1ª instancia accidental de Izamal, de cuyo Juzgado está encargado por ministerio de la ley, como Juez de paz electo en aquella ciudad.

Considerando: que como Juez de paz, no solo fué electo en la poblacion de su vecindad, sino que fué declarado tal por los Colegios electorales de Izamal, de conformidad con la ley, sin que hasta hoy nadie hubiese objetado la eleccion, en la declaracion consiguiente.

Considerando: que por lo expuesto, queda demostrada la legalidad de dicho Juez de paz, quien conforme á la ley, tambien se halla encargado del Juzgado de 1ª instancia, por falta de quien lo desempeñe en propiedad, siendo por este motivo legítima su competencia y jurisdiccion.

Por estos legales fundamentos, de conformidad con el parecer fiscal, fundado en la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, la autoridad, en nombre de los Supremos Poderes, falla: 1º: La Justicia de la Union no ampara ni protege á D. Ramon Solís, contra los actos del Juez accidental de 1ª instancia de Izamal, que lo juzga y tiene en prision como presunto reo de homicidio calificado. 2º: Sáquese testimonio de este fallo para publicar, y elévense los autos á la Corte Suprema de Justicia nacional, en revision, como previenen los arts. 13 y 27 de dicha ley orgánica. Notifíquese.—*I. Manzanilla.* Ante mí,—*José Anaeto Castillo.*

#### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Junio 6 de 1874.—Visto el recurso de amparo interpuesto ante el Juzgado de Distrito de Yucatan, por D. Ramon Solís, contra los procedimientos del C. Juan N. Buendía que funciona como Juez del crimen en la capital del Estado, por que con ellos se ha infringido el art. 16 de la Constitución federal, pues segun el solici-

tante, dicho Juez no es competente. Vista la rectificación hecha por el C. Juan Buendía; el informe del Juez suplente de 1ª instancia de Izamal, á cuya jurisdicción está sujeto Solís; el pedimento fiscal; la sentencia del Juez de Distrito, y Considerando: Que el Juez suplente de 1ª instancia de Izamal, nombrado conforme á la constitución particular del Estado, en el ejercicio de sus funciones legales, es el competente para juzgar y sentenciar á los acusados de delitos cometidos en su jurisdicción; que el delito de que se acusa al solicitante, fué cometido en el Partido judicial de Izamal.

Con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitución, se declara: 1º: Que es de confirmarse y se confirma, por sus propios legales fundamentos, la sentencia del Juez de Distrito de Yucatan, que negó el amparo á D. Ramon Solís. 2º: Con fundamento del art. 16 de la ley de 20 de Enero de 1869, se impone á D. Ramon Solís la multa de cien pesos.

Devuélvase las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revisión, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decreta, ron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*M. Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Junio 23 de 1874.—*Lic. Emilio Pardo*, oficial mayor interino.

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Yucatán por el C. Lic. Eduardo G. Pankhurst, en representación de D. Oscar Lorentzen, D. J. Luis Oliver, Genaro de la Fuente sucesores, D. José, D. Felipe y D. Santiago Villanueva, contra la Administración principal de rentas de la Capital, que les exige el pago del uno por ciento sobre numerario colocado para su exportación, y contra la disposición del artículo 2º del decreto número 92 de la Legislatura del Estado.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

Al Juzgado de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el 2 del corriente, se presentó el C. Lic. Eduardo Pankhurst, apoderado de los Sres. Oscar Lorentzen, D. J. Luis Oliver, Genaro de la Fuente sucesores y Villanueva Hermanos, quejándose de que la Tesorería general del Estado, les exige el uno por ciento sobre el numerario que iba á exportarse en la conducta que dirigía á Tampico y Veracruz, obligando á sus representados en sus particulares intereses, obligándolos á pedir amparo á la Justicia de la Unión, contra el acto del Tesorero, y el artículo 2º del decreto 92 de la Legislatura del Estado, que invaden la atribución de la autoridad federal, única competente para imponer y autorizar el cobro de derechos sobre exportación, y que promulgada la ley de 4 de Enero del año próximo pasado, solicitando aunque inútilmente la derogación de aquel impuesto, han ocurrido á la justicia federal, sin que hasta la fecha no se obtiene su respectable fallo; y que protestando con una exsacación, que amenaza de muerte la libertad mercantil, y que inspirándose la Legislatura en la ley fundamental del país, pusiese término á un arbitrio que entorpece el tráfi-